RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020)

RAD: EXPEDIENTE NUMERO 2020-00050

OBJETO DE LA DECISIÓN

Se emite la presente providencia con el fin de decidir el recurso de reposición en, interpuesto por la parte demandada en contra del mandamiento de pago franqueado el 29 de julio y corregido el 10 de agosto del cursante, por considerar que: i) el documento aportado no cumple con lo normado por el artículo 430 del C.G.P., ii) no es procedente el cobro de intereses de mora; iii) no se puede oficiar a la DIAN; iv) configurarse la causal 6° del artículo 100 del C.G.P. y v) carecer el demandante de legitimación en la causa.

ANTECEDENTES

El demandado fincó su inconformidad en los ejes temáticos referidos, tal como pasarán a exponerse.

i) el documento aportado no cumple con lo normado por el artículo 430 del C.G.P.: comenta que los autos aportados como sustento de la obligación que se ejecuta, no se ajustan a derecho en su criterio encontrándose en disputa entre las partes. Al interior del proceso 2014-801-50 instruido por la Superintendencia de Sociedades, el 8 de junio de 2016 se profirió sentencia que declaró el incumplimiento de Jorge Hakim Tawil, Alejandro Hakim Dow, José Alejandro Samper Carreño, Jaime Cano Fernández y Mauricio Rodríguez Morales demandado, por el incumplimiento de sus deberes como administradores, disponiendo entre otras cosas, que el hoy demandado y el señor Jorge Hakim Tawil fueran condenados en costas.

Posterior a ello, el Despacho instructor mediante auto del 22 de junio de 2016 ordenó sin fundamento alguno al hoy demandado pagar la cantidad de \$600.000.000,00 por concepto de honorarios del perito contable.

Bajo esos postulados, el recurrente considera que los autos que hoy sirven de sustento a la presente ejecución no contienen obligaciones actualmente exigibles, pues en su criterio fueron proferidos en contravención de las normas procesales.

Relata que tal como fue proferida la sentencia de primera instancia, y la providencia que dispuso confirmar y adicionar aquella el 21 de febrero de 2018, la parte vencedora dentro del proceso fue el hoy requerido, por lo que se permite concluir que se contravienen el numeral 1° del artículo 392 y numeral 1° del artículo 365 del C.G.P., normas que tienen el carácter de orden público.

Adicional a ello, se pasó por alto que la prueba por la cual se cobraron los honorarios que hoy se pretenden obedeció a una prueba de oficio, misma que debe ser sufragada por las partes en litigio en porciones iguales, tal como lo dispone el artículo 169 del C.G.P.

A su turno, se omitió también tener en cuenta lo dispuesto por la sentencia de instancia, es decir, que la misma condeno en costas parcialmente al señor Carlos Hakim Dacah, provocando que los autos base de ejecución pierda exigibilidad en su criterio.

Finalmente, en lo que concierne a este apartado el recurrente cuestionó el actuar de la autoridad administrativa investida de jurisdicción al decretar la prueba que sustentan los honorarios que hoy se ejecutan, pues en su sentir ya se habían invertido una serie de recursos con el mismo objetivo; sin embargo, se insistió en la prueba ya referida.

Cuestiona la forma en que fueron fijados los honorarios, dado que en su criterio no se discriminaron los conceptos del monto tasado a título de emolumentos de los peritos, sin que exista prueba alguna de ello, impidiendo en su momento el derecho de defensa del hoy ejecutado, incluso, se contrarió la propuesta presentada por la firma experta, donde indicaban que la cuantía del dictamen oscilaría entre \$300.000.000,00 a \$375.000.000,00.

ii) no es procedente el cobro de intereses de mora: sobre el particular, insistió que pese a haber condenado al pago de interés de mora en los términos del artículo 1617 del C.C., dicha obligación no puede ser tenida en cuenta por las falencias descritas.

iii) no se puede oficiar a la DIAN: sin mayores consideraciones, refiere que el artículo 73 de la Ley 9 de 1983 genera la obligación en el juez de informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, la existencia de títulos valores, situación que no ocurre en el plenario.

iv) configurarse la causal 6° del artículo 100 del C.G.P.: afirma que en el plenario no se aportó la prueba de la calidad en que actúa la parte demandante, por cuanto el demandante no acreditó que se hubiere celebrado válidamente la cesión del crédito por parte de PWC, cuestionándose adicionalmente que la cesionaria fuera la firma que representó a varios de los demandados en el proceso con un perito que se supone es independiente y autónomo. Asimismo, cuestionó que el demandante no hubiere notificado la cesión del crédito a su deudor, actuación que es de principal importancia tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

v) carecer el demandante de legitimación en la causa: ante la referida ausencia de prueba de la calidad en que actúa la parte demandante, se deberá colegir la falta de legitimación en la causa por activa, debiéndose declarar probada mediante sentencia anticipada bajo los preceptos del artículo 278 del C.G.P.

En armonía de lo expuesto, solicita se revoque el auto objeto de censura y en su lugar se niegue la ejecución formulada y en subsidio de lo anterior, se profiera sentencia anticipada acogiendo la falta de legitimación en la causa por activa.

Planteada en los anteriores términos la reposición propuesta y vencido el traslado de que trata el artículo 319 del C.G.P., se observa que la parte ejecutante recorrió el traslado concedido en bajo los argumentos que pasan a exponerse.

Contrario a lo planteado por el censor, la parte demandante indica que los documentos aportados como base de la presente ejecución si cumplen con la normatividad procesal aplicable, puesto que los mismos cuenta con una obligación clara, expresa y actualmente exigible a cargo del demandado, máxime cuando el título ejecutivo aportado resulta ser una providencia judicial en los términos de los artículos 442 y 114 del C.G.P.,

con sus respectiva constancia de ejecutoria, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional sin referir la providencia citada.

Asimismo, memora que conforme a lo indicado por el numeral 2 del citado artículo 422, en las ejecuciones de providencias judiciales solo procederán las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, por lo que las defensas impetradas por medio del presente recurso resultan en su criterio improcedentes.

Por otra parte, memora que conforme al artículo 423 ibidem, la notificación del mandamiento de pago hará las veces de notificación de la cesión del crédito cuando el demandante sea el cesionario, razón para descartar la falencia que advierte la parte demandada.

Frente la idoneidad de la cesión refiere que la misma se presume auténtica y fue realizada conforme a derecho, entregándose el título con las respectivas constancias de ejecutoria y realizada por un socio de la acreedora primigenia, que estaba plenamente autorizado para ello, razón suficiente para no adoptar la censura impetrada.

Así las cosas, solicitó se mantenga la decisión objeto de censura y se continúe el respectivo trámite.

En los términos planteados, este estrado judicial procede a resolver el presente recurso advirtiendo que el mismo fue interpuesto en tiempo, teniendo en cuenta que la notificación del extremo demandado se surtió dos días después -Art. 8 del Decreto 806 de 2020- del 10 de septiembre de 2020 -fecha de recibo de la comunicación de notificación personal-, es decir, el 14 de septiembre, y finalizando el término para recurrir el 17 del mismo mes, día en que fue radicado el presente remedio procesal.

CONSIDERACIONES

Como ya lo hemos anotado en múltiples oportunidades, en el ámbito del derecho procesal, es conocido que el recurso de reposición se encamina unívocamente a obtener que el juzgador revoque o modifique su decisión cuando al emitirla ha incurrido en error, tal como se infiere de lo dispuesto por el artículo 318 del C.G.P. Esa es pues la aspiración de la recurrente, luego, la revisión que por esta vía se intenta, resulta procedente.

Al efectuarse el estudio del proveído objeto de la censura, este Despacho no encuentra que se haya cometido yerro alguno como pasa a exponerse.

Previo al análisis de los reparos formulados por el extremo demandado, se debe memorar lo normado por el inciso segundo del artículo 430 del C.G.P., el cual indica que mediante recurso de reposición solo se podrán discutir los requisitos formales del título ejecutivo. Siendo la etapa procesal oportuna para formular defensas que ameriten la categoría de excepciones de mérito, los diez días siguientes a la notificación del mandamiento de pago al extremo demandado.

En ese orden de ideas, el Despacho procede a verificar si los reparos impetrados cuestionan los aspectos de forma del título ejecutivo o por si el contrario, pretenden enervar las pretensiones de la demanda y cuestionar la obligación cuya ejecución se predica.

Tal como fue planteado el primer reproche por el extremo demandado, se debe colegir que la parte demandada no cuestiona ningún aspecto de formal del título, como lo sería a modo de ejemplo la existencia o no de una constancia de ejecutoria por tratarse de una providencia judicial.

Por el contrario, lo que se censuró fue la virtualidad de ejecutividad de la providencia que contiene la obligación deprecada por su contraparte, al referir que el medio en el cual se consignó la prestación, contraria la realidad procesal que dio su génesis, el ordenamiento procesal y los contornos fácticos del mismo, siendo en últimas una discusión relativa a la obligación de pago que recae sobre el ejecutado más que un reparo de forma, razón suficiente para no aceptar el cuestionamiento formulado, por no ser la oportunidad procesal para alegar ese tipo de defensas tal como quedó expuesto.

Se debe indicar que misma suerte debe correr el segundo reproche elevado, puesto que se funda en los mismos supuestos fácticos y normativos para colegir la imposibilidad de cobrar intereses de mora al interior del presente asunto.

De otra parte, en lo que concierne a la tercera censura, tal como refiere el recurrente, en el presente caso al no estar en presencia de un título valor como título ejecutivo, no se hace necesario dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 9 de 1983, razón por la cual se revocará el inciso en segundo del auto del 29 de julio de 2020.

Finalmente, en lo que concierne a los cuestionamientos que orbitan frente a la validez o no y prueba de la cesión del crédito en comento, el Despacho advierte que no se configura la excepción previa formulada, tal como pasa a exponerse.

Contrario a lo expuesto por el demandante, en plenario quedó demostrada la cesión efectuada por el acreedor primigenio -PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda- por conducto de su representante tal como obra en el respectivo certificado de existencia y representación (*archivo digital-04Subsanacion20200714*).

Dicha cesión fue consignada en los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se predica, si bien en dicho apartado no hay una aceptación por el cesionario, no se puede desconocer que la misma se ha aceptado de manera tácita al analizar que por medio de la presente demanda ejecutiva, ha realizado actos inequívocos en pro de obtener de su deudor el valor del crédito cedido.

En ese orden de ideas, la excepción previa formulada será resuelta de forma desfavorable a los intereses del demandado con su respectiva condena en costas -numeral 1 artículo 365 C.G.P., las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la oportunidad respectiva al momento de realizar la respectiva liquidación de costas.

De otra parte, en lo que concierne a la ausencia de notificación del acto de cesión al deudor, se debe indicar, como bien lo pone de presente el demandante, que conforme los derroteros del artículo 423 del C.G.P. la notificación del mandamiento de pago al extremo pasivo hará las veces de enteramiento de la cesión del crédito cedido cuando quien demande sea el acreedor cesionario, tal como pasa en el caso bajo estudio.

En armonía de lo expuesto se puede colegir, que la falencia alertada por el censor no se presentó, teniendo en cuenta que tal como lo acepta en la parte introductoria del recurso formulado, el mandamiento de pago fue notificado el 10 de septiembre de 2020, surtiendo

efectos desde el 14 del mismo mes y año bajo los preceptos del artículo 8 del Decreto 806 del 2020.

Frente a la solicitud de sentencia anticipada, se debe indicar que la misma no se abre paso, dado que los argumentos que sirvieron de sustento para elevar la misma, han sido desestimados bajo los análisis efectuados en líneas precedentes.

Colofón de lo expuesto, el Despacho concederá parcialmente la reposición formulada contra la providencia que libró orden de apremio, únicamente en lo que refiere a la comunicación de la existencia del título ejecutivo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, quedando incólume el resto de la providencia, ordenándose controlar por Secretaría el término con el que cuenta el demandado para formular excepciones de mérito y pagar, bajo los preceptos del artículo 118 del C.G.P.

En mérito de lo someramente expuesto el **JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.D.C.**,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER parcialmente la reposición del auto objeto de censura, por lo expuesto en los considerandos, revocando la orden impartida el inciso en segundo del auto del 29 de julio de 2020 frente al cumplimiento del artículo 73 de la Ley 9 de 1983, en consecuencia, comunicar lo pertinente a la entidad, teniendo en cuenta que la orden ya se había ejecutado.

SEGUNDO: MANTENER la orden objeto de censura en lo demás, conforme a las breves razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción previa formulada por la parte demandada con sustento en la causal sexta del artículo 100 del C.G.P., conforme a los argumentos expuestos en la presente decisión.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada y a favor del demandante, fijando como agencias en derecho la cantidad de \$1.000.000, conforme a las razones expuestas.

QUINTO: NEGAR la solicitud de sentencia anticipada, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente decisión.

SEXTO: CONTROLAR por conducto de la Secretaría de este Despacho el término con el que cuenta el demandado para pagar y formular excepciones de mérito teniendo en cuenta lo normado por el artículo 118 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

MT

PILAR JIMÉNEZ ARDILA
JUEZ

JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
PROVIDENCIA NOTIFICADA POR ANOTACION EN

ESTADO ELECTRÓNICO No. 106
Alix Liliana Guáqueta Velandia. Secretaria

Firmado Por:

PILAR JIMENEZ ARDILA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 050 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7ef71825964f0c7c7544313c742470c99c40d784fece4360421427f6121eac61

Documento generado en 23/11/2020 03:48:43 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>